

**A LA ATENCIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA**  
**COMUNIDAD DE MADRID**

C/ Basílica nº 23  
28020 Madrid

D. Antonio Jesús Tocino De la Iglesia, con DNI 07854445Z, actuando en nombre y representación de la mercantil **FERROVIAL SERVICIOS, S.A.** (CIF A80241789) (en adelante, “**FERROVIAL**”), según acredita mediante la respectiva copia de la escritura de poder que se acompaña como **Documento nº 1**, y, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, Parque Empresarial Vía Norte, Calle Quintanavides, 21, 28050, [contratación.fse@ferrovial.com](mailto:contratación.fse@ferrovial.com), comparece ante dicho Organismo y,

**EXPONE**

**PRIMERO.-** Que en fecha 20 de septiembre se ha publicado en el Perfil del contratante Acta de la Mesa de contratación, de fecha 6 de septiembre de 2019, en relación con el contrato de servicios denominado “*OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA, ALA DERECHA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID*” (en adelante la “**Licitación**”) con número de expediente A/OBR-008244/2019, por la cual, acuerda excluir a mi representada de la presente Licitación. Asimismo, en fecha 18 de septiembre de 2019 (publicada el 23 de septiembre) se reúne de nuevo la Mesa de contratación para ratificar la exclusión de mi representada acordada en la sesión anterior.

A tal efecto, se acompaña como **Documento agrupado nº 2**, copia de las Actas por las cuales se acuerda la exclusión de mi representada, siendo ésta el acto impugnado en el presente recurso.

**SEGUNDO.-** Que estando en disconformidad con el citado acto, dentro del plazo establecido al efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, “**LPAC**”), interpone **RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN** contra el Acta de la Mesa de contratación de 6 de septiembre, y su posterior ratificación, por la cual, se acuerda la exclusión de mi representada de la presente Licitación, y por ende, se propone la adjudicación a favor de la empresa ELECNOR, S.A., todo ello de conformidad con las siguientes

## ALEGACIONES

### **PREVIA.- ACTO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN.**

Con carácter previo, interesa señalar que el contrato que nos ocupa no está sujeto a regulación armonizada, toda vez que se encuentra por debajo de los umbrales económicos previstos para el contrato de obras. Asimismo, dicha circunstancia también se desprende de la lectura de la cláusula 1ª, apartado 6º, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “PCAP”).

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con la cláusula 44ª del PCAP los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso conforme a lo previsto en la LPAC:

*“Cláusula 44. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes.*

*(...)*

*Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”*

Por otro lado, el artículo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “LCSP”) dispone lo que sigue:

*“Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de **recurso** de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.”*

En este sentido, el acto impugnado (esto es, la exclusión de mi representada) sería susceptible de recurso de reposición conforme al artículo 112 de la LPAC que establece lo que sigue: “1. *Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de*

**reposición**, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”

A mayor abundamiento, cabe citar lo dispuesto en el artículo 123 de la LPAC: “1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos **potestativamente en reposición** ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.”

A la vista de lo anteriormente expuesto, contra el Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 6 de septiembre, por la cual, se acuerda la exclusión de mi representada, así como su posterior ratificación por medio de Acta de 18 de septiembre, cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

En este caso la no formalización del contrato por parte de mi representada al haber sido excluida del procedimiento debe considerarse como un acto de trámite que impide al recurrente no sólo continuar en el procedimiento, sino culminar el procedimiento de licitación con su adjudicación.

No obstante lo anterior, si el órgano al que nos dirigimos no fuera el competente para resolver el presente recurso, se ruega se remita el presente escrito, a la mayor brevedad, al órgano correspondiente para su resolución.

#### **PRIMERA.- RESUMEN DE LOS HECHOS.**

A continuación, pasamos a exponer, siquiera de forma sucinta, los hitos más relevantes en la presente Licitación:

- Con fecha 22 de mayo de 2019 se publicó la convocatoria de la presente Licitación en el Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.
- En dicho Anuncio se fijó como fecha límite para la presentación de las proposiciones el 11 de junio de 2019.
- Con fecha 22 de agosto de 2019, se reunió la Mesa de contratación y se propuso la adjudicación del contrato a la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
- Mediante escrito enviado el 23 de agosto de 2019 se requirió a mi representada para que presentase los documentos previstos en el artículo 140 y 150.2 de la LCSP, concediéndose un plazo para cumplimentar la entrega de la referida documentación.
- En fecha 26 de agosto de 2019 se ingresó la Garantía definitiva en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.

- En fecha 4 de septiembre de 2019 mi representada remitió el resto de la documentación solicitada, constando el aval depositado desde el día 26 de agosto.
- En fecha 6 de septiembre de 2019 se reunió la Mesa de Contratación para proceder a excluir a mi representada al entender que no se había presentado la documentación solicitada en el plazo concedido, así como a requerir a la empresa ELECNOR la entrega de la misma documentación por ser la situada en segundo lugar. El Acta fue publicada en el Perfil del contratante el día 20 de septiembre.
- En fecha 18 de septiembre de 2019 se reunió de nuevo la Mesa de Contratación para ratificar la exclusión de mi representada de la Licitación, así como para proceder a la revisión de la documentación facilitada por la empresa ELECNOR. El Acta fue publicada en el Perfil del contratante el día 23 de septiembre.

**SEGUNDA.- AUSENCIA DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN. INCUMPLIMIENTO DE PLIEGOS. EXCLUSIÓN IMPROCEDENTE.**

Mostramos nuestra absoluta disconformidad con el acto administrativo recurrido, y su posterior ratificación, en la medida que resulta de todo punto improcedente la exclusión acordada por la Mesa de Contratación al haber considerado, erróneamente, que mi representada no presentó documentación alguna en plazo, a excepción de la garantía definitiva.

A continuación, demostraremos que el acto recurrido incurre en diversos vicios de nulidad al haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

En primer lugar, el Acta de fecha 6 de septiembre de 2019 indica que: *“De conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 in fine LCSP, aplicable supletoriamente al procedimiento abierto simplificado, **de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado**, se entenderá que **el licitador ha retirado su oferta**, debiendo procederse a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.”*

A estos efectos, resulta errónea la interpretación que realiza la Mesa de Contratación sobre la aplicación al caso que nos ocupa de las consecuencias de la falta de documentación en el plazo previsto en el artículo 150.2 de la LCSP por varios motivos.

En primer lugar, la sanción prevista para el caso de no cumplimentarse el requerimiento señalado en dicho apartado se refiere a un ámbito temporal distinto, esto es, hace referencia a un **plazo de diez hábiles**, debiéndose entregar la siguiente documentación:

- a) Documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) y c) del artículo 140.1;
- b) Documentación que acredite disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2;
- c) De haber constituido garantía definitiva.

Sin embargo, en la presente licitación nos encontramos ante un procedimiento simplificado, que se rige por las disposiciones contempladas en el artículo 159 de la LCSP, y que alude expresamente a que el requerimiento debe cumplimentarse en el plazo de 7 días hábiles. Por tanto, el plazo difiere respecto al contemplado en el art. 150.2 LCSP.

A mayor abundamiento, el procedimiento simplificado tiene su propia regulación. Se trata de una nueva modalidad de contratación donde se persigue la simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.

Tal y como establece el artículo 159.4, letra f), apartado 4º de la LCSP, presentada la garantía definitiva se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

Continúa dicho precepto señalando que, si en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presenta la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

Sin embargo, la norma nada indica acerca del resto de documentación, es decir, únicamente hace referencia a que, si no se presentase la garantía definitiva en el plazo estipulado, se efectuará la adjudicación a favor del siguiente candidato. Ello es así para dar agilidad al presente procedimiento toda vez que la mayor parte del resto de la documentación puede ser acreditada a través del ROLECE.

Por tanto, resulta de todo punto criticable que la Administración realice una **interpretación “extra legem”** aplicando al caso que nos ocupa las consecuencias nocivas que prevé el artículo 150.2 de la LCSP ante la falta de cumplimiento del requerimiento en el plazo de 10 días hábiles, cuando ha concedido un plazo inferior. Máxime si tenemos en cuenta que las consecuencias previstas en dicho precepto (150 LCSP) no pueden aplicarse, de forma supletoria, al procedimiento simplificado, ya que éste regula esta cuestión expresamente en el artículo 159.4, letra f), dando preponderancia a la presentación de la garantía definitiva y contemplando dicha

consecuencia únicamente para el caso de que no se presente dicha garantía en el plazo estipulado, esto es, de 7 días hábiles.

En todo caso, aun en el caso de que dicho Organismo estimase que el artículo 159.4 de la LCSP genera algún tipo de duda en cuanto a las consecuencias previstas ante la falta de presentación en el plazo de 7 días hábiles de la documentación requerida en la letra f) del apartado 4º del citado precepto de la LCSP, debemos acudir al **tenor literal de los pliegos** para ver cómo ha previsto el Organismo que debe actuar en estos casos.

Así, el PCAP establece de forma nítida las consecuencias de la falta de presentación de la documentación requerida en el plazo señalado, y, en concreto, establece claramente que **si no la subsana** se entenderá que ha retirado su oferta. A tal efecto, nos remitimos a la cláusula 14ª, pág. 31, del PCAP:

*“Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, **si no la subsana**, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, **se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor**, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello.”*

Sin perjuicio de la claridad de esta cláusula, **en el caso que nos ocupa no se ha producido dicho requerimiento de subsanación**, tal y como predicen los pliegos, debiendo recordar a este respecto la manida doctrina expresada por nuestros Tribunales, por la cual, tanto la Administración como los administrados están obligados a **cumplir los pliegos** toda vez que son **-ley del contrato-**

Al margen de esta irregularidad, lo cierto es que el artículo 159.4, letra f), apartado 4º, de la LCSP es meridianamente claro cuando menciona que en caso de que el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva se efectuará la propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación:

*“4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que **constituya la garantía definitiva**, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme*

al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

*En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.*

**Presentada la garantía definitiva** y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, **se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.**

*En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario **no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación,** otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.”*

Tal y como consta en el relato fáctico del presente recurso, y así ha sido reconocido por la Mesa de Contratación en las Actas que se adjuntan como Documento agrupado nº 2, **en fecha 26 de agosto de 2019 mi representada había depositado la garantía definitiva en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.** A fin de acreditar la veracidad de las afirmaciones, se acompaña como **Documento nº 3** copia del resguardo acreditativo.

Por tanto, en la medida que mi representada había constituido la garantía definitiva en el plazo concedido al efecto, en caso de que faltase alguna documentación dicha Administración debería haber concedido un plazo de 3 días hábiles para subsanarla, de conformidad con la cláusula 14ª del PCAP. La ausencia de dicho requerimiento, unido a la claridad del artículo 159.4, letra f) de la LCSP sobre las consecuencias previstas para el caso de que no se aporte la garantía definitiva en el plazo otorgado, demuestran indudablemente que la exclusión es manifiestamente improcedente, toda vez que, no se ha seguido correctamente el procedimiento legalmente establecido en dicho precepto.

### **TERCERA.- NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO.**

Aun en el caso de que no mereciera favorable acogida la alegación anterior, debemos insistir que el acto recurrido es igualmente nulo, en la medida que **la actuación de la Mesa de Contratación no se acomoda a la legislación vigente.**

A tal efecto, conviene traer a colación el tenor literal del artículo 159.4, letra f), apartado 3º, de la LCSP, cuyo contenido no deja lugar a dudas cuando menciona que **le corresponde a la Mesa de Contratación comprobar** los siguientes aspectos: “3.º *Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solventía económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incurso en ninguna prohibición para contratar.*”

En definitiva, la legislación vigente impone a la Mesa de Contratación la verificación de los siguientes aspectos:

- *Que la empresa está debidamente constituida,*
- *Que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta,*
- *Que ostenta la solventía económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación*
- *Que no está incurso en ninguna prohibición para contratar*

Baste recordar que el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en adelante, “**ROLECE**”) se crea en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 326 a 332 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Los empresarios pueden inscribir en él los datos de personalidad y capacidad de obrar, autorizaciones y habilitaciones, solventía y clasificación empresarial, a los que se refiere el artículo 328 de la Ley, **y sus certificados acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público**, a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solventía económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Así se contempla en el artículo 96.1 de la LCSP, que establece lo siguiente:

*“1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público **acreditará frente a todos los órganos de contratación** del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, **las condiciones de aptitud** del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solventía económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.”*



Respecto a la posibilidad de acreditar la capacidad y la solvencia de las empresas, conviene acudir a la cláusula 10ª del PCAP (cfr. pág. 21) donde se hace referencia a la posibilidad del Organismo de recabar dicha información de otros órganos y registros oficiales:

*“El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como **anexo V** de este pliego.”*

Asimismo, la cláusula 14ª del PCAP relativa a la “Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicación” dispone lo que sigue:

*“La mesa de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al interesado su aportación. Asimismo requerirá, en su caso, al licitador, la presentación por medios electrónicos, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, de los documentos que se indican a continuación (...)”.*

En este sentido, las propias Juntas Consultivas de Contratación, ante las cuestiones planteadas por diversas Administraciones, han venido refiriéndose a la validez del ROLECE y a la exención de presentar documentación para acreditar las circunstancias ya contenidas en el propio ROLECE, de entre cuyas consultas destaca el **Informe 1/2013, de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid**, sobre certificados de registros de licitadores, que en su conclusión primera establece que “El certificado del ROLECE exime a los licitadores de presentar la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, información que variará en función de la documentación que haya aportado cada licitador para su expedición. En todo caso, será obligatoria la inscripción en el ROLECE de la clasificación de las empresas contratistas, que incluirá los datos relativos a la personalidad jurídica y capacidad de obrar, así como la de las prohibiciones de contratar en los casos especificados en el artículo 61.4 del TRLCSP”.

A mayor abundamiento, debemos señalar que la aplicación y validez de la certificación del ROLECE se extiende igualmente a los supuestos incluso en los que ni se incluye ni menciona en los propios pliegos, como así lo resolvió y consideró la citada **Junta**

*Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid en su Acuerdo 17/2013, de 30 de mayo*, sobre modificación de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la Junta Consultiva, que señala que “ *En los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en la cláusula relativa a la forma y contenido de las proposiciones, se encuentra reflejada la información relativa al certificado del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, pero no se efectúa ninguna mención al certificado del ROLECE, dado que el artículo 83.1 del TRLCSP tiene carácter básico y resulta de aplicación directa, por lo que no se consideró precisa su reproducción en los pliegos. No obstante, ante las dudas suscitadas en algunos órganos de contratación, y con el fin de mejorar la redacción de dichos modelos de pliegos, se estima conveniente añadir en la citada cláusula la mención a la posibilidad de que los licitadores puedan aportar el certificado del **ROLECE, el cual les eximirá de presentar en los procedimientos de contratación pública la documentación correspondiente a los datos que figuren en él**, información que, como se ha indicado, variará en función de la documentación que haya aportado cada licitador para su expedición*”.

Por tanto, la obligatoriedad de la inscripción en el ROLECE, lejos de responder a una exigencia fútil, sirve para agilizar la tramitación del procedimiento de selección del contratista.

Ello viene reflejado en la cláusula 14ª, apartado 5º, relativo al “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público” que dispone al efecto:

*“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público **eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera**, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por la Administración de la Comunidad de Madrid.*

*No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios electrónicos.*

*Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.”*

Por tanto, es evidente que toda aquella documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar, **no debe ser aportada por el candidato propuesto como adjudicatario ya que estaba a disposición del Organismo** a través del acceso al ROLECE.

Sin embargo, el requerimiento efectuado por la Mesa de Contratación, en fecha 23 de agosto de 2019, en su primer apartado, exige indebidamente al candidato que aporte los documentos que acrediten la personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación y clasificación o solvencia, de acuerdo con el artículo 140 de la LCSP, en el plazo de 7 días hábiles.

En el segundo apartado del requerimiento efectuado el 23 de agosto, se exige la siguiente documentación:

*“Asimismo deberá aportar la documentación relacionada en el artº 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo estipulado en la cláusula nº 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, salvo que ya los hubiera aportado en el procedimiento, o no se hubiera opuesto a la consulta de sus datos por medios electrónicos.*

- *Constituir **garantía definitiva** por importe de 18.462,13 euros, de conformidad con lo que establece el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, depositándola en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, Plaza de Chamberí nº 8.*
- *Deberá presentar la documentación acreditativa de la **disposición de medios** que se han comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y recogidos en la cláusula 1.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares, mediante la aportación documental de:*
  - *Declaración responsable firmada por el representante de la empresa en la que se relacionen las personas que componen el equipo de trabajo.*
  - *CV firmado los componentes del equipo de trabajo en los que se especifique la titulación y experiencia.*

- *Certificados expedidos o visados por el órgano competente que acrediten la experiencia mínima requerida, o en su defecto, declaración responsable del representante legal de la empresa.*

Tal y como hemos indicado con anterioridad, la **garantía definitiva** fue constituida y depositada ante la Tesorería de la Comunidad de Madrid, en fecha 26 de agosto de 2019, por tanto, dicha documentación se presentó en el plazo establecido al efecto.

En cuanto a la documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, la cláusula 14ª.3 del PCAP establece que: *“el órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación: /.../”*.

Por último, respecto a la documentación acreditativa de la **disposición de medios** el requerimiento indica que debe actuarse conforme al artículo 76 de la LCSP, así como la cláusula 1.8 del PCAP, cuyo tenor dispone lo que sigue:

*“ Adicionalmente a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 LCSP, todos los licitadores deberán adquirir el **compromiso de adscribir o dedicar a la ejecución del contrato, los medios personales descritos a continuación**, mediante la presentación en el sobre nº 1 “Documentación Administrativa” de la declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa, en este sentido (Modelo Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas).*

*El adjudicatario asume el compromiso de poner a disposición del contrato, un equipo de obra para la ejecución de la misma, que garantice el plazo de ejecución establecido, compuesto como mínimo de un jefe de obra y un encargado general. Este equipo estará adscrito a la obra durante todo el plazo de ejecución de la misma. Cada uno de los integrantes de este equipo deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en obras similares, y se deberá proponer a la Dirección Facultativa y a la Propiedad para su conformidad.*

*El propuesto como adjudicatario **en el plazo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, deberá acreditar la disponibilidad efectiva de los medios especificados anteriormente**, mediante la aportación documental de:*

- ☐ *Declaración responsable firmada por el representante de la empresa en la que se relacionen las personas que componen el equipo de trabajo.*

- *CV firmado los componentes del equipo de trabajo en los que se especifique la titulación y experiencia.*
- *Certificados expedidos o visados por el órgano competente que acrediten la experiencia mínima requerida, o en su defecto, declaración responsable del representante legal de la empresa.”*

*[El subrayado y la negrita es nuestro]*

Como consecuencia de la lectura de este apartado, cabe concluir que la documentación acreditativa de la disposición de medios que el licitador se ha comprometido a adscribir a la ejecución del contrato **debía acompañarse de conformidad con el apartado 1.8 del PCAP** que hace referencia a su aportación en el plazo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, esto es, en el **plazo de 10 días hábiles**.

En consecuencia, **la aportación por mi representada de la citada documentación el día 4 de septiembre de 2019 se encontraba dentro del plazo legalmente establecido en dicho precepto.**

Resulta curioso que sea la Mesa de Contratación la que en el Acta de fecha 6 de septiembre de 2019 haga referencia a la aplicación al caso que nos ocupa del artículo 150.2 de la LCSP, por aplicación supletoria al procedimiento simplificado, y, sin embargo, no tenga en cuenta que el plazo mencionado en dicho precepto hace referencia a 10 días hábiles para aportar la documentación solicitada, plazo exigido igualmente en el apartado 1.8 del PCAP.

El Órgano de Contratación, debe de realizar la interpretación de las cláusulas confusas mantenidas en los pliegos rectores de la licitación, conforme al principio de igualdad, enfocada a garantizar la concurrencia en el procedimiento y de forma favorable para los licitadores, pues éstos no son responsables de la ambigüedad en la configuración de los anuncios y los pliegos.

A tal efecto, resulta ilustrativa la Resolución del TARC Aragón 8/2016, a tenor de la cual, se establece que la Administración no puede salvar la contradicción que pudiera existir entre las cláusulas del pliego mediante una interpretación que perjudique a quienes cumplieron con lo establecido en ellas. La carga de claridad del contenido de los pliegos de condiciones, es de los poderes adjudicadores, y, por tanto, las cláusulas ambiguas, contradictorias o confusas, que no hayan sido disipadas durante el proceso de selección, son también responsabilidad de los mismos.

La jurisprudencia actual ha destacado que la incertidumbre creada por la Administración a la hora de redactar los pliegos de condiciones no puede jugar a su favor y en perjuicio del contratista, por lo que la existencia de cláusulas ambiguas, contradictorias entre sí y creadoras de indudable oscuridad sólo debe perjudicar a la Administración que las redactó, en aplicación del artículo 1288 CC. Con rotundidad se pronuncia en tal sentido la **STS de**

**3 de febrero de 2003**, dictada en unificación de doctrina, según la cual «Es manifiesto que los contratos administrativos son contratos de adhesión, en que la Administración es quien redacta las cláusulas correspondientes, por lo que, conforme a lo prevenido en el artículo 1288 del Código Civil la interpretación de las cláusulas oscuras no debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.

A la vista de lo expuesto, y dado que se ha incumplido el procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo la adjudicación del contrato, es evidente que debe procederse a: (i) declarar la nulidad del acto recurrido (exclusión), (ii) proceder a la retroacción de las actuaciones al momento anterior al que se cometió el vicio de nulidad, y por último (iii) adjudicar a mi representada la presente licitación.

#### **CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.**

El artículo 117 de la LPAC dispone que la interposición de un recurso administrativo podrá suspender la ejecución del acto impugnado si concurre la siguiente circunstancia:

*“b) la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 de esta Ley.”*

Dado que en nuestro caso se incurre en la vulneración del artículo 47.1 e) y g) del citado texto legal, interesa al recurrente que se proceda a acordar la suspensión del acto impugnado, y, por ende, de la presente Licitación.

En virtud de lo expuesto,

**SOLICITA a dicho Organismo**, que tenga por presentado este escrito, lo admita, disponga su unión al expediente de referencia, tenga por interpuesto **RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN** contra el Acta de la Mesa de contratación mencionada en el Expositivo I, por la cual, se acuerda excluir a FERROVIAL de la licitación y adjudicar el Contrato a la empresa ELEC NOR, S.A., y, previos los trámites legales oportunos lo resuelva declarando:

- (i) la nulidad del acto impugnado por no ser ajustado a derecho y,
- (ii) se retrotraiga el procedimiento al momento en que se cometió el vicio de nulidad,
- (iii) procediendo a adjudicar el Contrato a mi representada al ser la oferta económicamente más ventajosa.

En Madrid, a 10 de octubre de 2019.

**PRIMER OTROSÍ DICE**, que a la vista de lo expuesto y de los documentos aportados por mi representada,

**SOLICITA a dicho Organismo** se acuerde la **suspensión** del procedimiento de adjudicación sin necesidad de aportación de garantía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 de la LPAC.

Se reitera en lugar y fecha señalados *ut supra*.

**SEGUNDO OTROSÍ DICE** que, en caso de no considerarse competente el órgano al que respetuosamente esta representación se dirige,

**SOLICITA a dicho Organismo**, que se remitan las actuaciones al Órgano competente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Se reitera en lugar y fecha señalados *ut supra*.

---

**FERROVIAL SERVICIOS, S.A**  
**D. Antonio Jesús Tocino De la Iglesia**